



## SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diez de noviembre de dos mil veintitrés

### **A23-244**

Proceso: apelación auto.  
Demandantes: **CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE ALZATE**  
**VALENTINA GÓMEZ AGUIRRE**  
**MARÍA CAMILA GÓMEZ AGUIRRE**  
Demandado: **PAULA ANDREA SALDARRIAGA ROA**  
Radicado No.: 05001-31-05-014-2020-00233-01.  
Decisión: **CONFIRMA** auto que rechaza demanda

Link: [05001310501420200023301](https://expediente.digita.gov.co/expediente/05001310501420200023301) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión proferida el 15 de noviembre de 2022 mediante la cual el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín rechazó la demanda, expediente remitido a esta corporación el 5 de septiembre de 2023.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 38** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

### **1. ANTECEDENTES**

Mediante demanda ordinaria laboral, la señora Claudia Patricia Aguirre Álzate, en calidad de cónyuge supérstite, y las jóvenes María Camila Gómez Aguirre y Valentina Gómez Aguirre, quienes actúan en nombre propio, y en calidad de hijas del señor John Jairo Gómez Jaramillo fallecido el 30 de marzo de 2016, impetraron esta acción en contra de la señora Paula Andrea Saldarriaga Roa, tendiente a obtener el reconocimiento y/o REGULACIÓN DE LOS HONORARIOS que hubiesen correspondido al causante, profesional del derecho que representó a la aquí accionada tanto en el trámite administrativo como judicial tendiente al reconocimiento de un retroactivo pensional (correspondiente aproximadamente a 6 mesadas), junto con los intereses moratorios que en vida hubiesen correspondido al cónyuge de aquella, señor Didier

Alonso Rojas Ruiz, que falleció el 7 de junio de 2011 tramitando el otorgamiento de una pensión de invalidez, proceso ordinario cuyo conocimiento le correspondió inicialmente al Juzgado Quinto Laboral del Circuito, posteriormente al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales.

Por auto del 31 de agosto de 2020 (archivo 04) el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín decidió devolver la demanda para que subsanara, so pena de rechazo, los siguientes requisitos:

- 1.- En cumplimiento a las exigencias procesales impuestas por el Decreto 806 de junio de 2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en sus artículos 5° y 6°, en concordancia con el artículo 25 del CPTSS, la parte actora deberá indicar el canal digital donde deben ser notificadas las partes.
- 2.- Establecer la cuantía cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia.

La parte actora radicó memorial tendiente a subsanar requisitos referenciando su canal digital para efecto de notificaciones; respecto de la demandada precisaron que únicamente conocían la dirección física y número de teléfono que nuevamente reseñan (archivo 05). Frente a la cuantificación de las pretensiones, señalaron que:

“(…) conforme al escrito de la demanda, a las pretensiones y al acápite de pruebas, se solicitó al Despacho que oficiara al juzgado que tramitó el proceso judicial a favor de la demandada y a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que remitieran copia tanto del expediente judicial como el expediente administrativo con el fin de realizar la tasación efectiva de honorarios y gastos, dado que la demandada no realizó el pago de los honorarios proporcionales causados, y al continuar el trámite judicial con un apoderado diferente al designado por la oficina de las herederas del Dr. JOHN JAIRO GOMEZ JARAMILLO (Q.E.P.D.) no se pudo tener acceso a la finalización del proceso y menos al cumplimiento de sentencia ni a la resolución de reconocimiento emitida por Colpensiones; en tal sentido, es indispensable para la tasación de honorarios y gastos a favor a de las demandantes las pruebas de oficio solicitadas en el libelo demandatorio.

El 15 de noviembre de 2022 el juzgado de origen rechazó la demanda al indicar que la parte actora NO subsanó cabalmente los requisitos de los artículos 25 y 26 del CPT y la SS (archivo 11), decisión contra la cual la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación (archivo 12), el primero de ellos resuelto desfavorablemente el 4 de septiembre de 2023 (archivo 14), siendo remitido el expediente a esta corporación para surtir la alzada.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. DE LA PARTE DEMANDANTE AL SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN**

Que tras revisar el historial del proceso en la página web de la rama judicial, se observaba que mediante auto del 31 de agosto de 2020 el juzgado inadmitió la demanda y concedió el término de 5 días para subsanarla. Que las razones del despacho, al adoptar dicha determinación, obedecieron a los siguientes argumentos: que en cumplimiento del Decreto 806 de 2020, debía aportarse un canal digital de notificaciones de las partes y que debía establecerse la cuantía del proceso.

Que dentro del plazo señalado, radicó memorial que contenía subsanación a la demanda, recalcando la solicitud impetrada en el acápite de pruebas toda vez que no le fue posible continuar con el curso del proceso hasta su etapa final y posterior trámite administrativo para obtener el cumplimiento de fallo, razón por la cual no se tenía, ni para entonces ni en la actualidad, acceso a la sentencia de única instancia, ni al cumplimiento de fallo, siendo imposible determinar con exactitud el monto reconocido a la aquí demandada para así tasar el porcentaje de honorarios pactados y la cuantía de este proceso.

Que en tal sentido, NO era de recibo que el juzgado impusiera una carga que estaban en total imposibilidad de cumplir, pues era de pleno conocimiento que este tipo de información, dado su carácter personal, no era de dominio público, ni eran entregadas a terceros sin previa autorización de su titular.

Reitera que NO tiene conocimiento alguno de a cuánto asciende la condena impuesta a favor de la demandada, ni cuanto fue el monto reconocido por Colpensiones, situación que podía superarse con la solicitud de oficio presentada al juzgado.

Manifiesta que, de acuerdo a la Ley 2213 de 2022, mediante la cual se aprobó de manera permanente el Decreto 806 de 2020, cuando se desconozca la dirección electrónica de una parte esta situación debe ser manifestada al juzgado y en todo caso el juzgado deberá continuar con el trámite del proceso teniendo como dirección de notificación la dirección física suministrada o incluso, de ser necesario, proceder con el emplazamiento de la parte, pues estas herramientas no han sido derogadas de la legislación nacional.

Que NO puede entonces una formalidad como esta, convertirse en un obstáculo para acceder al sistema judicial de este país y obtener una efectiva y real protección a los derechos. De tal manera que exigir de las partes hechos o información que están en la imposibilidad de suministrar, resulta totalmente desproporcionado. Recalca que en la legislación nacional nadie está obligado a lo imposible.

## 2.2. DEL JUEZ AL RESOLVER EL RECURSO DE REPOSICIÓN

Adujo que si bien el abogado allegó memorial tendiente a subsanar la demanda, lo cierto es que solo señaló los canales de notificación de las partes, más no indicó la cuantía de las pretensiones, a fin de establecer si el despacho era competente para conocer del trámite de la demanda, razón por la que no podía admitirla y darle el trámite de primera instancia, sin tener claro cuál era la cuantía de las pretensiones; menos aun que tal requisito podía concretarse en el transcurso del proceso, o hasta obtener respuesta de un oficio.

Por lo anterior, el despacho se mantuvo en la decisión de NO REPONER el auto que rechazó la demanda.

## 3. ALEGATOS

Únicamente los presentó la parte actora. Expresamente indicó que:

### 1. Frente a la cuantía del proceso

Para resolver el asunto planteado es menester tener en cuenta que, entre los factores para determinar la competencia, se encuentran el objetivo que se refiere a dos aspectos: la naturaleza y la cuantía del asunto. En relación con el primero, la competencia se fija tomando en consideración al contenido del negocio, es decir, la materia litigiosa; y con relación al segundo aspecto, la competencia se determina por el monto de la pretensión.

Ahora bien, para efectos de determinar cuál procedimiento se debe aplicar en razón de la cuantía, el artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, señala los siguientes parámetros:

*“Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás.*

*Donde no haya juez laboral de circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez de circuito en lo civil. Los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, donde existen conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente”*

A su turno, el artículo 13 del mismo estatuto consagra:

*“COMPETENCIA EN ASUNTOS SIN CUANTÍA. De los asuntos que no sean susceptibles de fijación de cuantía, conocerán en primera instancia los Jueces del Trabajo, salvo disposición expresa en contrario. En los lugares en donde no funcionen Juzgados del Trabajo, conocerán de estos asuntos, en primera instancia, los Jueces del Circuito en lo Civil.”*

Partiendo de la normativa en cita, se tiene que el Juez Laboral del Circuito es competente para conocer de los asuntos cuya cuantía exceda el monto de veinte veces

el salario mínimo legal vigente, debiéndoles impartir el procedimiento de primera instancia, así como aquellos que por su naturaleza carezcan de cuantía.

Así las cosas, en este caso no le asiste razón al a quo, pues con las pretensiones principales se busca obtener el equivalente al 30% de las costas del proceso con radicado 05001410500120170089300, más el 100% de las costas procesales y de forma subsidiaria la fijación judicial de honorarios profesionales. Pretensiones que no es susceptible de fijación de cuantía, máxime si se tiene en cuenta que dentro del proceso faltan pruebas por ser decretadas que permiten el esclarecimiento de una eventual condena, como lo es la prueba de oficio solicitada por la parte demandante en su escrito de demanda.

2. Frente al canal digital de las partes (...)"

De esta manera insiste que se debe revocar el auto recurrido mediante el cual se rechazó la demanda, y en consecuencia se proceda con su admisión.

#### 4. CONSIDERACIONES

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 1º del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto que *rechace la demanda*.

Tenemos entonces que las demandantes manifiestan su descontento con la decisión adoptada por el despacho, de un lado, porque sí bien desconocían el canal digital de la convocada a juicio, lo cierto es que habían suministrado una dirección física y en gracia de discusión, se surtiría su emplazamiento. De otro lado, en cuanto a la estimación de la cuantía, aceptaron que la desconocían, pero que no estaban obligadas a lo imposible y en tal sentido NO debía ello comportar una barrera para acceder a la administración de justicia, punto que podía esclarecerse en el transcurso del proceso, a través de la práctica de la prueba solicitada mediante oficio.

No obstante, aunque el recurrente lo menciona e incluso lo replica en los alegatos presentados en esta instancia, el primero de los aspectos aludidos, es decir, el canal digital de la demandada para efecto de notificaciones, NO cimentó el auto que hoy se reprocha, dado que a voces del a quo, el incumplimiento que edificó la decisión a través de la cual rechazó la demanda, únicamente lo fue la ausencia de estimación de la CUANTÍA. De ahí que la Sala únicamente se ocupe del análisis de tal aspecto.

Aclarado lo anterior, es menester traer a colación lo estipulado por el art. 25 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, el cual regula la forma en que debe presentarse una demanda: la designación del juez, de las partes y su domicilio, clase de proceso,

pretensiones, **cuantía**, hechos y omisiones en que se fundamente, razones de derecho, entre otras. La norma expresamente señala que:

**ARTICULO 25. FORMA Y REQUISITOS DE LA DEMANDA.** <Ver Notas del Editor>  
<Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La demanda deberá contener:

1. La designación del juez a quien se dirige.
2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas.
3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda.
4. El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
5. La indicación de la clase de proceso.
6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado.
7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados.
8. Los fundamentos y razones de derecho.
9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y
- 10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia.**

Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo. (Resaltos de la Sala)

Por su parte, el artículo 28 ibídem prevé las causales de devolución de la demanda, norma que en lo pertinente es del siguiente tenor:

“ART. 28.—**Modificado. Ley 712 de 2001, art. 15.** Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no cumple los **requisitos exigidos** por el artículo 25 de éste código, la devolverá al demandante para que subsane dentro de cinco (5) días las deficiencias que le señale (...)” (Resaltos de la Sala)

Nótese hasta aquí como el legislador en la norma en comento, que debe servir de sustento para resolver el problema jurídico planteado, previó como una causal para devolver la demanda que NO se estimase la cuantía.

Ahora, si acudimos al folio 10 del archivo 03 del expediente digital, contentivo del cuerpo de la demanda, se aprecia el siguiente acápite:

#### **PROCEDIMIENTO, COMPETENCIA Y CUANTÍA**

Es usted señor juez competente para conocer de la presente demanda, en consideración de la naturaleza del proceso y del domicilio de las partes, por ser la cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, ya la parte reclamante había anunciado que la pretensión se encaminaba a obtener la regulación de unos honorarios causados por las labores ejercidas por un profesional del derecho en otro proceso ordinario laboral pero que se tramitó en un juzgado de pequeñas causas laborales.

Y justamente es ahí donde el a quo, al devolver la demanda, solicitó el establecimiento de la cuantía para fijar la competencia, so pena de rechazo. Claramente estaba facultado para hacerlo, una mirada sencilla de la norma así lo advierte, aunado a ello, en este asunto, era imprescindible estimar a cuanto ascendían los honorarios para efectos de establecer si se imparte el trámite de única o primera instancia, si corresponde a un juez del circuito o a un juez municipal.

No puede la parte actora, so pretexto de una negación del acceso a la administración de justicia, solicitar que el punto se esclarezca en el trámite del proceso.

Ahora, NO desconoce la Sala lo esgrimido por las demandantes, quienes afirman que nadie está obligado a lo imposible, ello es cierto, pero lo que aquí se le reprocha es que teniendo interés legítimo para solicitar algunas piezas procesales o acceso a un expediente, jamás lo hubiesen intentado, ninguna solicitud elevaron en tal sentido. Si mediase una negativa del juzgado que les impidiese acceder a la información requerida, que juzgan de primordial para estimar la cuantía, probablemente habría de variar las consideraciones de esta Magistratura. Pero ello no sucedió, no cumplió la parte con su deber procesal o por lo menos en el plenario NO reposa prueba de ello.

Recuérdese en este punto lo normado en el art. 78 del Código General del Proceso, cuando enlista los deberes de las partes y sus apoderados, en cuyo numeral 10 señaló: *abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir.*

Pero al margen de tal circunstancia, debemos destacar que la norma que regula la forma y requisitos de la demanda, permite que se haga una ESTIMACIÓN de la cuantía, cálculos que eventualmente podría haber efectuado la parte señalando el valor del eventual retroactivo que debió recibir la señora Paula Andrea Saldarriaga con ocasión de las mesadas que conformaron la pensión de invalidez, cuyo trámite inició su cónyuge fallecido Didier Rojas, e incluso hacer una proyección de los intereses moratorios para efectos de demostrar que el porcentaje que comprenderían los honorarios pretendidos, superaría los \$17.556.040, es decir, los 20 SMLMV para el año 2020, cuando radicó la demanda.

Sin embargo, ello tampoco ocurrió, lo que quiere decir, sin asomo de duda, que la parte actora, NO subsanó uno de los dos requisitos por los cuales fue devuelta la demanda, siendo procedente su rechazo a la luz de lo normado en el art. 28 del CPT y la SS.

Sin costas en esta instancia dado que las mismas no se estiman causadas.

**5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMA** la decisión proferida 15 de noviembre de 2022 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín al rechazar la demanda instaurada por **CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE ALZATE, VALENTINA GÓMEZ AGUIRRE y MARÍA CAMILA GÓMEZ AGUIRRE**, contra la señora **PAULA ANDREA SALDARRIAGA ROA**, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS No. 194 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>